

CARLOS LAVERDE GALLEGO

ABOGADO U.P.B.

260

Medellín, Cra. 65 8B-91, Of. 362, 2º P., Terminal del Sur, Telefax 354 65 72, E-mail: carlosalaverde@gmail.com

Señores
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
 Envigado

Referencia: PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 Demandante: SARA ISABEL BETANCUR M., MARTHA LUCÍA MUÑOZ
 BOTERO Y OTROS
 Demandados: SOTRAMES S.A. Y OTROS
 Asunto: CONTESTACIÓN DE DEMANDA
 Radicado: 2019-187.

CARLOS LAVERDE GALLEGO, mayor de edad, vecino y residente en Medellín, con oficina en la carrera 65 8B-91-362, Terminal del Sur, abogado en ejercicio, con tarjeta profesional 12.545 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la sociedad TRANSPORTADORA MEDELLÍN ENVIGADO SABANETA "SOTRAMES S.A.", sociedad domiciliada en el Municipio de Sabaneta, con NIT 890 910 984-6, según poder otorgado por su Representante Legal, señora MARÍA CRISTINA ÁNGEL ARANGO, quien es mayor de edad, vecina y residente en el Municipio de Sabaneta, poder que obra dentro del proceso; y de los señores LUIS JAVIER NARANJO LOTERO y ÁLVARO ALONSO AGUDELO, mayores de edad, vecinos y residentes en el Municipio de Sabaneta, carrera 43 A 63Sur-35, en calidad de copropietarios del vehículo de servicio público, de placas SNN-317, bus, afiliado a SOTRAMES S.A., poder que se adjunta, me permito dirigirme ante su Despacho a efecto de:

- 1) Notificarme a nombre de los poderdantes del auto admisorio de demanda, de fecha 30 de Julio de 2019.
- 2) Contestar demanda DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL EN PROCESO VERBAL DE MAYOR CUANTÍA, instaurada por: SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ, MARTHA LUCIA MUÑOZ BOTERO y ÓSCAR ANTONIO BETANCUR PÉREZ, mayores de edad, vecinos y residente en el Municipio de Medellín, carrera 39 48-80, apto. 101; contestación que se hace dentro del término hábil y legal pertinente.

CONTENIDO DE LA CONTESTACIÓN.-

1. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE DEMANDA
2. RELACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS
3. OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES- EXCEPCIONES-
4. OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

CARLOS LAVERDE GALLEGO

ABOGADO U.P.B.

261

Medellín, Cra. 65 8B-91, Of. 362, 2° P., Terminal del Sur, Telefax 354 65 72, E-mail: carlosalaverde@gmail.com

5. DEMANDA DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA EN ESCRITO SEPARADO.

1. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS.-

AL HECHO PRIMERO: Es cierto.

AL HECHO SEGUNDO: No es cierto que el conductor del vehículo de placas SNN-317, hubiera "omitido la solicitud de la joven de parar en el respectivo paradero de la Clínica de la Policía...", y que hubiese detenido el vehículo de servicio público metros antes. El vehículo fue detenido en el paradero reglamentario, y cómo la hoy, accionante viajaba al lado del conductor, éste le indica a la accionante, que se podía bajar por la puerta delantera, esto como un acto de prudencia del conductor de dicho automotor.

AL HECHO TERCERO: No es cierto que "el conductor del bus retrocede un poco sin verificar si los pasajeros habían finalizado el descenso...", y como consecuencia de tal retroceso se hubiese presentado la lesión de la accionante; se estará a lo que se pruebe.

AL HECHO CUARTO: Es cierto.

AL HECHO QUINTO: Es cierto.

AL HECHO SEXTO: Es cierto.

AL HECHO SÉPTIMO: Es cierto.

AL HECHO OCTAVO: Es cierto.

AL HECHO NOVENO: Ciertamente, y de acuerdo a los anexos de demanda, la accionante SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ fue atendida en la Clínica de La Policía y posteriormente en la Clínica El Rosario, sede Centro, Medellín.

En cuanto al diagnóstico, se estará a lo que se pruebe dentro del proceso.

AL HECHO DÉCIMO: Es cierto.

AL HECHO DÉCIMO PRIMERO: Es cierto.

AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO: Efectivamente, en la fecha mencionada, 7 de Abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia aquí mencionada, donde el señor JUAN CAMILO PULGARÍN BETANCUR se allanó a cargos por lesiones personales culposas. La aceptación como tal, para el caso de esta demanda, no determina inequívocamente "conducta culposa" de quien conducía el vehículo de servicio público, el 22 de Diciembre de 2016 en las horas de la mañana.

AL HECHO DÉCIMO TERCERO: De conformidad con los anexos presentados al demandar referidos con pérdida de capacidad laboral, la parte accionada y que

CARLOS LAVERDE GALLEGO

ABOGADO U.P.B.

262

Medellín, Cra. 65 8B-91, Of. 362, 2º P., Terminal del Sur, Telefax 354 65 72, E-mail: carlosalaverde@gmail.com

represento, en forma clara y expresa no acepta el diagnóstico de "una pérdida de capacidad laboral del **20.28%**..."

En el dictamen, al cual se hace referencia a una pérdida de capacidad laboral ya mencionada, y al hacer los análisis y conclusiones, concretamente al hablar de "deficiencias", se indica: **"Deficiencia por disestesia secundaria a neuropatía periférica o lesión de médula espinal y dolor crónico somático"**, que determina una valoración de 15,00%; así como las "deficiencias del sistema nervioso central y periférico" y "deficiencias por alteración de las extremidades superiores e inferiores", este contexto, de descripciones de lesiones sobre la que se fundamenta la incapacidad, carece de prueba sobre la historia clínica presentada por la parte accionante.

Cuando se observan los Dictámenes de Medicina Legal, se puede apreciar que en éstos, no se ha dictaminado que la lesionada haya presentado "lesión de médula espinal" como tampoco "alteración de las extremidades superiores". Así mismo, de la historia clínica que hace parte de los elementos probatorios de la demanda, tampoco se llega a las deficiencias a que se hace referencia y sobre las que se valora la pérdida de capacidad laboral. Los Dictámenes de Medicina Legal a los que hago referencia son de Febrero 3 de 2017 y del 4 de Septiembre del mismo año.

AL HECHO DÉCIMO CUARTO: Como lo indique antes, no se acepta la "estructuración del daño aquí mencionado, y se estará a lo que se pruebe.

AL HECHO DÉCIMO QUINTO: No les consta a los accionados y se estará a lo que se pruebe.

AL HECHO DÉCIMO SEXTO: La parte accionada no acepta como ya lo indiqué el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y estará a lo que se pruebe en relación con el daño moral y el daño a la vida de relación.

AL HECHO DÉCIMO SÉPTIMO: Frente a la expectativa de vida de la accionante y su edad actual, será el Despacho quien considere pertinente o no, pronunciarse frente a lo que consagra la resolución aquí mencionada.

AL HECHO DÉCIMO OCTAVO: La parte accionada estará a lo que se pruebe en relación con el lucro cesante, planteado frente a la pérdida de capacidad laboral, al salario y a la expectativa de vida.

AL HECHO DÉCIMO NOVENO: A los accionados no les consta ni conocen, cómo está conformado el hogar de la señora SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ, como tampoco conocen ni les consta los sufrimientos, zozobra, dolor y malestares de los que dicen ser víctimas por las lesiones de SARA ISABEL. Se estará a lo que se pruebe.

AL HECHO VEINTE: A los accionados no les consta ni conocen la "serie de erogaciones" que menciona la demandante, y por ello se estará a lo que se demuestre y pruebe fehacientemente.

CARLOS LAVERDE GALLEGO

ABOGADO U.P.B.

263

Medellín, Cra. 65 8B-91, Of. 362, 2º P., Terminal del Sur, Telefax 354 65 72, E-mail: carlosalaverde@gmail.com

AL HECHO VIGÉSIMO PRIMERO: A mis representados no les consta ni conocen que el día "13 de Noviembre de 2018, se haya radicado reclamación en las instalaciones de la demandada COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.".

2. RELACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS.-

De conformidad con el artículo 96, numeral 4º del C.G. del P., a nombre de la parte demandada, solicito los siguientes medios probatorios:

A. Interrogatorio de parte.

Se citará a los demandantes: SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ, MARTHA LUCÍA MUÑOZ BOTERO y ÓSCAR ANTONIO BETANCUR PÉREZ, mayores de edad, vecinos y residentes en el Municipio de Medellín, carrera 39 48-80, apto 101, quienes habrán de responder interrogatorio de parte, que en forma verbal se hará dentro de la audiencia que se fije para tal fin, según lo consagra el artículo 219 y concordantes del C.G.P.

Para tal efecto, y como los accionantes afirman vivir fuera de la sede del juzgado, es decir, en el Municipio de Medellín, se procederá a comisionar al Juzgado Civil del Circuito –Reparto- Medellín, para la práctica de dicha prueba, adjuntando al comisorio, copia de la demanda y de la contestación de la misma.

B. Exhibición de Documentos

La demandante SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ, de conformidad con el artículo 265 del C. G. del Proceso, exhibirá ante el Despacho y en audiencia, bien, copia original o autenticada del contrato de trabajo a término indefinido o fijo, que se encontraba vigente para el día 22 de Septiembre de 2016, fecha de accidente objeto de demanda, teniendo en cuenta que el contrato de trabajo presentado como vinculación laboral de la accionante, indica que éste se llevó a efecto el 17 de Octubre de 2017, más de un año después de ocurrido el accidente.

Así mismo, la accionante exhibirá recibos o comprobantes de pagos que como empleada, ella estuviera recibiendo en los meses de Junio, Julio, Agosto y primera quincena de Septiembre de 2016.

Con lo anterior, se pretende demostrar que no es cierto lo que se expone en el hecho Décimo Quinto de la demanda, y que el salario en que se fundamenta la acción para pago de perjuicios no es cierto.

C. Testimonial.

- Se citará a las peritos PAOLA ANDREA DAVID TULCAN y NATALIE SERRANO MARCHAN, quienes suscriben dictamen de pérdida de capacidad laboral, sufrido por la accionante SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ, a efecto de que ellas en forma clara y detallada indiquen al Despacho, las razones sobre las que se determinaron "las deficiencias" a que se hace referencia en dicho dictamen, donde se indica que la paciente,

CARLOS LAVERDE GALLEGO

ABOGADO U.P.B.

264

Medellín, Cra. 65 8B-91, Of. 362, 2º P., Terminal del Sur, Telefax 354 65 72, E-mail: carlosalaverde@gmail.com

hoy demandante, presentó lesión de médula espinal, alteración de miembros inferiores, así mismo, "deficiencias por alteración de las extremidades superiores e inferiores".

Es de tener en cuenta que en los Dictámenes de Medicina Legal, presentados por la accionante, se habla de un tipo de lesiones muy diferentes a las contempladas por quienes suscriben la pérdida de capacidad laboral de SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ.

- Se citará para oír en declaración al Doctor DANIEL CAMPUZANO ESCOBAR, quien de acuerdo a documentación presentada al demandar, es "especialista en anestesiología y reanimación-dolor y cuidado paliativo", vinculado al Instituto Colombiano del Dolor, profesional que de conformidad con anexos de la demanda, ha venido atendiendo a la accionante SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ, a efecto de que en forma clara, concreta, y frente a las lesiones reales y asistencia que él le ha prestado a la demandante, indique al Despacho, si esa circunstancia o condición de dolor permanente a que se hace referencia en la historia clínica levantada y presentada al accionar, es sólo y única consecuencia cierta de las lesiones sufridas en el pie derecho de la lesionada, que fueran objeto de intervención quirúrgica. El citado profesional tiene su domicilio en la ciudad de Medellín, Avenida 33 74E-156, teléfono 448 89 19, quien será presentado al Despacho a la audiencia a que hubiere lugar.

D. Pericial.

- Se tendrá como prueba, y de acuerdo con los artículos 226 y 227 del Código General del Proceso, dictamen pericial que rendirá perito calificado y en relación con la valoración real de las lesiones, incapacidad y secuelas sufridas por la accionante, esto frente a dictamen pericial -pérdida de capacidad laboral-, historia clínica del Instituto Colombiano del Dolor y dictámenes de Medicina Legal, todos presentados por la accionante.

Como el término de traslado para contestación de demanda y para aportar dictamen, no es suficiente para adjuntarlo con esta contestación, el mismo, se aportará al proceso "dentro del término que el juez conceda".

E. Oficios.

- De conformidad con los hechos décimo quinto y décimo octavo de la demanda, así como con la prueba documental referida como "12. Copia de uno de los contratos laborales entre DEMPOS-MEDICAMENTOS POS S.A. y la joven SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ...", se oficiará a esta empresa, carrera 46 48CS-40, bodega 136, Municipio de Envigado, a efecto de que se ponga a disposición del Despacho copia de pagos que se hayan realizado a "su trabajadora" SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ, entre los meses Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016, y derivados del contrato de trabajo a término fijo que se adjuntó con la demanda.

CARLOS LAVERDE GALLEGO

ABOGADO U.P.B.

265

Medellín, Cra. 65 8B-91, Of. 362, 2° P., Terminal del Sur, Telefax 354 65 72, E-mail: carlosalaverde@gmail.com

3. OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES –EXCEPCIONES.-

A nombre de los demandados SOTRAMES S.A., JUAN CAMILO PULGARÍN BETANCUR, LUIS JAVIER NARANJO LOTERO y ÁLVARO ALONSO AGUDELO ORREGO, me opongo a las pretensiones de la parte demandante, con fundamento en las siguientes

EXCEPCIONES:

- A. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA
- B. COMPENSACIÓN DE CULPAS
- C. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.

Antes de desarrollar los medios defensivos mencionados, haré referencia al concepto planteado frente a la relación entre el ilícito civil y el ilícito penal (culpa civil, culpa penal). La parte accionante para fundamentar sus pretensiones, fls 14 y 15 de su demanda, ha indicado:

"Cuando se produce un daño civil que al mismo tiempo genera la posibilidad de una investigación penal por el mismo hecho, lo primero por lo que uno se pregunta es por las incidencias que ese proceso penal pueda tener en el proceso civil indemnizatorio. Esto ha llevado a la doctrina y a la jurisprudencia a discutir largamente sobre las relaciones entre la falta o culpa civil y la penal, optándose unas veces por el criterio según el cual ambas culpas son totalmente idénticas, en tanto en otras oportunidades se afirma que se trata de dos culpas distintas cada una de ellas con su propia ontología..."

"Antes, sin embargo, es preciso hacer énfasis en que cuando hablamos de culpa civil y de culpa penal estamos hablando más concretamente de falta civil y de falta penal en sentido amplio. En efecto, ya hemos dicho que la culpa en sentido genérico debe entenderse como una falta culposa o dolosa..."

La parte accionante fundamentándose en lo que trata el Doctor JAVIER TAMAYO JARAMILLO en su TRATADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, Tomo I, pretende que en el presente caso, y donde el conductor del vehículo de servicio público aceptó su responsabilidad penal en el hecho, tal aceptación de responsabilidad penal, se hace extendible a propietarios del vehículo y empresa afiliadora SOTRAMES S.A.

Frente a este tema en el fl. 15 de la demanda, se anotó y para sustentar que la responsabilidad penal en el accidente conlleva responsabilidad civil frente a terceros:

"En su entidad psicológica la culpa o falta culposa penal es idéntica a la culpa o falta civil, pues ambas comprenden la imprudencia, la impericia y la negligencia y es posible que estos conceptos sean diferentes en uno u otro ordenamiento jurídico. **Es contradictorio, por ejemplo, afirmar que se es imprudente a la luz del derecho penal, y que, al mismo tiempo, se es prudente desde el punto de vista civil o viceversa. Por ello, podemos**

CARLOS LAVERDE GALLEGO

ABOGADO U.P.B.

266

Medellín, Cra. 65 8B-91, Of. 362, 2º P., Terminal del Sur, Telefax 354 65 72, E-mail: carlosalaverde@gmail.com

afirmar que todo delito culposo en materia penal es también cuasi delito civil si con ese comportamiento se causó daño a terceros.

Algunos han pretendido diferenciar los dos tipos de falta afirmando que mientras la culpa civil se juzga en abstracto, la penal se juzga en concreto. En otras oportunidades se afirma que mientras la culpa penal debe revestir cierta gravedad, la civil compromete la responsabilidad del agente sin tener en cuenta su gravedad.

Sin embargo, ninguno de esos dos criterios es convincente. En efecto, tanto en materia civil como penal, la culpa necesariamente deberá ser juzgada en abstracto, pues en uno y otro caso, el juez solo puede deducir la culpa mediante la comparación de los hechos probados en el proceso con el prototipo abstracto que del hombre prudente se ha formado el fallador...".

Mas adelante y frente al mismo tema, se anota: "Ahora, a menudo quienes hablan de una pretendida diferencia entre culpa civil y culpa penal se fundamentan en el hecho de que, en algunos casos, aunque no haya ilicitud penal de todas formas es posible una acción de responsabilidad civil contra el sindicado. Con todo, pensamos que en tales circunstancias se trata de conductas que por ser dañosas constituyen un ilícito civil, así no sean reprochadas por el orden penal...".

Con la anterior teoría y de acuerdo a lo que en el caso presente y frente al demandado en calidad de conductor, se debe tener su responsabilidad como fundamento obligado para proferir sentencia adversa contra propietarios y empresa transportadora; es de importancia conocer que, realmente sí existe diferencia entre culpa civil y culpa penal. En el proceso penal no han sido condenados los codemandados propietarios y empresa transportadora.

En relación con la diferenciación entre culpa penal y culpa civil que desconoce la parte accionante, debe estarse a lo que frente a este tema trata el Doctor GILBERTO MARTÍNEZ RAVE, en su obra LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN COLOMBIA, cuando anota:

"Dentro del concepto de culpa civil tenemos que diferenciar la culpa que origina la responsabilidad contractual, de la que genera la responsabilidad extracontractual. El artículo 63 C.C. divide la culpa civil en tres categorías: la grave, que asimila impropriamente al dolo (y decimos impropriamente porque el dolo siempre requiere intención de causar un daño, mientras la culpa no tiene por finalidad el daño. Este resulta de la imprudencia o de la negligencia), la leve y levisima. En cambio, en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, y en eso se asemeja un poco más a la penal, sólo se exige la culpa, sin calificativos de ninguna clase. Tanto en lo penal como en la responsabilidad civil extracontractual la culpa compromete al causante sin importar la calificación de grave, leve y levisima, del art. 63 ib., pues ésta solo tiene acomodo en el campo contractual, en donde, de acuerdo con las obligaciones que el contrato imponga a cada uno de los contratantes, se configuran grados de culpa que originan o no responsabilidad civil. El incumplimiento de las obligaciones contractuales permite suponer la existencia de culpa y, por lo tanto, como norma general, la culpa contractual se presume por el incumplimiento, cuando la obligación que se adquiere en el contrato

CARLOS LAVERDE GALLEGO

ABOGADO U.P.B.

267

Medellín, Cra. 65 8B-91, Of. 362, 2º P., Terminal del Sur, Telefax 354 65 72, E-mail: carlosalaverde@gmail.com

es de resultado. En síntesis, como en el transporte, el contratista debe transportar sana y salva a una persona de un lugar a otro, el hecho de no hacerlo, por volcamiento, desperfectos del vehículo, incumplimiento en general, lo presume en culpa. Pero cuando la obligación que se adquiere es de medio, la del profesional que debe atender un asunto, ya sea abogado, médico, odontólogo, y en el cual se compromete poner a disposición del cliente sus conocimientos o preparación, y no el resultado, no existe la presunción de culpa. Hay que probarla. De ahí que cuando la obligación es de resultado su incumplimiento presume en culpa al obligado. Si la obligación es de medio no existe presunción de culpa, hay que probarla”.

“En Colombia el concepto de culpa, como elemento integrante de la responsabilidad civil extracontractual, es muy vago e impreciso. Contradicciones manifiestas se encuentran en las decisiones judiciales porque, al no tener una definición legal en el campo civil, algunos falladores acuden a interpretar y adecuar los conceptos penales de la culpa, otros acuden a una de tantas tesis o interpretaciones que los tratadistas y falladores franceses dan y que a veces son contradictorias o muy diferentes, originando un caos jurídico que ocasiona desconcierto entre quienes buscan la protección de su derecho. La Corte Suprema de Justicia no ha sido tampoco muy afortunada en formular un criterio definido, sistematizado, concreto, sobre el concepto de culpa, propiciando así las variadas y a veces contradictorias posiciones de los falladores”.

“Nosotros descartamos los principios y características de la culpa penal para ser aplicada en el campo de la culpa civil. Analizadas las diferentes teorías nacionales y francesas, hemos encontrado más ajustada a la situación colombiana actual la definición de los hermanos Mazeaud. La Culpa “es un error de conducta que no lo habría cometido una persona cuidadosa situada en las mismas condiciones externas que el autor del daño”. Así entendemos la culpa civil como diferente a la penal. Y eliminamos también el sistema colombiano de comparar la conducta del causante con la de “un buen padre de familia” que se ha convertido en un patrón de conducta desactualizado por su vaguedad. Aceptamos la posición, ya indicada, que permite cotejar la conducta, en abstracto, del causante con la de una persona diligente y cuidadosa. La llamada “culpa objetiva”.

Y aceptamos esta posición porque comprendemos que apenas sí se abre paso entre nosotros la teoría de la responsabilidad objetiva, de la cual somos partidarios y en la cual quedan eliminados todos estos problemas al no exigir la prueba de la culpa, sino del hecho, del daño y del nexo de causalidad para que nazca la obligación indemnizatoria”.

Sigue el autor diciendo: “El apoyo doctrinario de la culpa es la imprudencia, negligencia o desconocimiento de reglamento en lo penal, pero con la confusión que ya hemos mencionado en cuanto hace a la responsabilidad civil y penal muchos pretenden encontrar en esos mismos principios el soporte de la culpa civil”.

“Sin embargo, hay notorias y manifiestas diferencias entre la culpa penal y la culpa civil. La culpa penal es personalísima. No se trasmite. La culpa civil, por el contrario, se trasmite por activa o por pasiva, no sólo por motivo de muerte sino en los casos en que se debe responder por hechos de terceros o hechos de cosas ya animadas, ya inanimadas. La culpa penal siempre debe probarse. El procesado se presume inocente y

CARLOS LAVERDE GALLEGO

ABOGADO U.P.B.

268

Medellín, Cra. 65 8B-91, Of. 362, 2º P., Terminal del Sur, Telefax 354 65 72, E-mail: carlosalaverde@gmail.com

corresponde al Estado demostrar la existencia de la culpa para poder responsabilizar a alguien penalmente. Por el contrario, en el campo civil muchas veces la culpa se presume y es el presunto responsable el que tiene que destruir esa presunción. La culpa penal no admite grados. Es una y única. La culpa civil, por el contrario, se ha dividido en grave, leve y levísima, especialmente en el campo de la responsabilidad civil contractual. La culpa penal no admite reducción como sí lo admite la culpa civil, según el art. 2357 del C.C. En lo penal no opera la compensación o neutralización de culpas. En el civil, la culpa de la víctima permite reducir el monto de la indemnización”.

Someramente paso a sustentar los anteriores medios defensivos, así:

A. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.-

En su obra la “RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN COLOMBIA”, el profesor GILBERTO MARTÍNEZ RAVE, VII Edición, Biblioteca Jurídica, expone:

“La doctrina y la jurisprudencia han establecido que el nexo de causalidad se interrumpe, se rompe, cuando se dan tres fenómenos que se ha cobijado bajo el término “causa ajena”, es decir, causa no imputable al presunto responsable: a) Hecho de la víctima. b) Fuerza mayor y caso fortuito. c) Hecho de un tercero. Como se puede observar, los términos hecho de la víctima y hecho de un tercero, los cultores de la teoría subjetivista o de la culpa, los denominan culpa de la víctima o culpa de un tercero.

El hecho de la víctima que los subjetivistas denominan culpa de la víctima tiene notorias repercusiones en el campo indemnizatorio. Su participación puede graduarse en el resultado, según su causalidad. Por eso en algunos casos puede ser la causa total y única del resultado pero en otros sólo llega a ser un agravante o concurrente.

Cuando el hecho de la víctima es único y determinante en el resultado el nexo de causalidad se rompe, es decir, que la imputación física del resultado se hizo mal, ya que no fue aquel el causante sino la propia víctima. En ese caso no surge responsabilidad civil y el indebidamente imputado o demandado se libera de la obligación de indemnizar, que nunca existió. Y esto, que es fácil de comprender en el campo de la responsabilidad objetiva, se hace mas difícil en el campo de la responsabilidad subjetiva, porque ya hay que analizar una serie de factores subjetivos, internos, que determinan la culpa y que no siempre son fáciles de valorar. Por eso se ha dicho, por los defensores de las tesis culpabilistas, que la culpa exclusiva de la víctima exonera de responsabilidad. Así se aplica en nuestros medios judiciales.

“Para que el hecho de la víctima pueda ser exonerante de responsabilidad o disminuya el monto de la indemnización, según sea el caso, debe llenar los siguientes requisitos: a) Tener un nexo de causalidad único (compartido sólo disminuye la indemnización) con el resultado. Los hechos cometidos por la víctima que no tengan un nexo de causalidad único o compartido con el resultado son intrascendentes y por lo tanto no tienen ninguna consecuencia o repercusión en el monto de la indemnización. b) Ese hecho, que se imputa

a la víctima, no puede originarse o tener relación con el causante o demandado. Por lo tanto el causante no debe haber provocado o causado el hecho de la víctima. Si el causante lo provocó o lo causó parcial o totalmente no tiene el hecho de la víctima ninguna consecuencia liberatoria. Esta situación, relativamente clara y sencilla en el campo de la teoría objetiva, se complica y dificulta en el campo de las teorías subjetivistas, porque ya se exige no el hecho de la víctima sino la culpa de la víctima, con las dificultades que traen los elementos subjetivos como la imprevisibilidad, la irresistibilidad”.

En la acción objeto de demanda, en forma muy leve y corta, pero clara y contundente, se puede apreciar, y será objeto de prueba, que fue la conducta de la lesionada SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ, la que produjo su lesionamiento, así se acredita en contexto o afirmación por ella expuesto al presentarse al examen de Medicina Legal. El Perito, indicó que “la examinada refiere que “bajándose del bus en la esquina de la clínica de la policía, se dobló el pie derecho y se fracturó, esto ocurrió el día 22 de septiembre de 2016 a las 07:40 horas”. En el segundo dictamen de Medicina Legal, sobre incapacidad, del 4 de Septiembre de 2017, se hace la misma afirmación sobre la forma y circunstancias de su lesionamiento.

La lesionada en principio fue atendida en la Clínica de La Policía, Envigado, y luego enviada a la Clínica El Rosario, Sede Centro, Medellín, donde de acuerdo a la información por ella suministrada –historia clínica-, dijo: “Que el día de ayer sufre accidente de tránsito como ocupante de vehículo de servicio público (bus), al realizar la parada para bajarse ésta tiene caída en el hueco de la calle”.

Cuando en el dictamen de pérdida de capacidad laboral de la demandante, se hace el “resumen del caso”, se anotó: “Asiste a valoración por medicina laboral para calificación de la pérdida de capacidad laboral **por accidente en bus público al caerse de éste el día 22-09-16**”. Negrillas fuera de texto.

La hoy demandante, como obra en el proceso, no se presentó ante las Autoridades de Tránsito, no obstante habersele informado que debía comparecer para el trámite contravencional respectivo “mostrando falta de interés en el asunto contravencional”, pudiéndose afirmar o sugerir que ésta se consideraba responsable de su propio lesionamiento.

Cuando en el trámite contravencional rinde declaración JUAN CAMILO PULGARÍN BETANCUR, conductor del vehículo de servicio público, en relación con los hechos, indico: “**Llego al paradero de la clínica de la policía me tocan el timbre paro en el paradero abro las dos puertas una de las pasajeras que se estaba bajando por la puerta delantera pisa mal en el pavimento y se tuerce el tobillo y al ver que el tobillo se le torció se tira al andén y se acuesta**”. Esta versión es igual o similar a la que se hace referencia en el Dictamen de Medicina Legal; en ese lesionamiento no hay intervención alguna del conductor del vehículo de servicio público. El contexto de la declaración rendida por este conductor ante la Autoridad de Tránsito, es clara, bien fundamentada, razonada, concordante con lo expuesto por la hoy demandante, circunstancia que permite sin equívoco alguno afirmar que los hechos, sólo son consecuencia de la conducta desarrollada en este

CARLOS LAVERDE GALLEGO

ABOGADO U.P.B.

270

Medellín, Cra. 65 8B-91, Of. 362, 2º P., Terminal del Sur, Telefax 354 65 72, E-mail: carlosalaverde@gmail.com

accidente, por la accionante SARA ISABEL BETANCUR; esa sí, una conducta imprudente.

B. COMPENSACIÓN DE CULPAS.-

Esta compensación de culpas, que subsidiariamente puede ser declarada en este proceso, tiene su respaldo en el Artículo 2357 del Código Civil, que indica: **"La apreciación del daño está sujeta a la reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente"**.

Refiriéndose a este Artículo, La Corte ha expuesto: "La compensación de culpas tiene lugar **cuando el que sufre el daño se expuso a él imprudentemente** o si un error de conducta ha sido la causa determinante de tal daño. Ese es el sentido y el alcance del art. 2357 del C. C.". Casación, Febrero de 1945. Negrillas fuera de texto.

Subsidiariamente este medio defensivo puede ser decretado al proferirse sentencia por su Despacho, porque dentro del trámite procesal la prueba podría demostrarlo y probarlo.

Acogiéndonos a lo obrante en el proceso con relación a la conducta desarrollada por la accionante –lesionada–, a la que le faltó cuidado y precaución al descender del vehículo de servicio público, cuando éste se encontraba totalmente parado, que no se presentaron otros lesionados, y no obstante haber descendido varios pasajeros, se puede dar aplicación subsidiariamente a la norma en principio referenciada; cuando puede considerarse con fundamento en la prueba que la accionante –lesionada– concurrió con su conducta al resultado, como en el caso presente. Puede afirmarse en forma lógica que a la dama mencionada, le faltó precaución y diligencia para bajarse del bus, no obstante que el mismo se encontraba estacionado, y de éste descendieron varios pasajeros como realmente ocurrió, y todos salieron ilesos porque el automotor nunca fue movido cuando se llevaba a efecto el descenso de pasajeros.

Frente a este tipo de conducta, la desarrollada por la accionante, ha expresado La Corte lo siguiente, en Sentencia de Junio de 1948, que no por la época, sino por el contenido jurídico de la misma, es aplicable en el caso de autos.

En la misma se dijo: *"El principio fundamental en que se basa la culpabilidad de la víctima está expresado en esta fórmula volenti non fit iniuria, respecto del cual observa Lalou que si la víctima por consentimiento ha aceptado un riesgo, no puede luego quejarse del perjuicio que le resulte de esa aceptación. Por su parte Savatier observa a su turno que todo hombre en posesión de sus facultades se considera que conoce sus deberes morales y legales y si viola uno de ellos no puede pretenderse exento de culpa alegando que ignoraba tal principio. Por eso el art. 2357 del C. C. a tono con la doctrina y la jurisprudencia contemporáneas, se refieren no solo a quien voluntariamente acepta un riesgo, sino a quien se expuso a él imprudentemente. Ahora bien, el conocimiento o aviso del riesgo o peligro es un elemento subjetivo indispensable para deducir o no la culpa de la víctima y ese elemento entraña en cada caso una cuestión de hecho que debe estimarse ante las pruebas del proceso y que no permite sentar ninguna regla general*

CARLOS LAVERDE GALLEGO

ABOGADO U.P.B.

271

Medellín, Cra. 65 8B-91, Of. 362, 2º P., Terminal del Sur, Telefax 354 65 72, E-mail: carlosalaverde@gmail.com

sobre el particular, porque cada caso entraña por su naturaleza una cuestión distinta y, por lo tanto, una solución diversa”.

C. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. -

La demandante SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ pretende un pago de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$48.861.786) como valor total de perjuicio patrimonial; además en perjuicios extrapatrimoniales –perjuicios morales y daño a la vida de relación-, la suma de CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$41.405.800), respectivamente, es decir, plantea una pretensión de CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$131.673.386).

Los codemandantes MARTHA LUCÍA MUÑOZ BOTERO y ÓSCAR ANTONIO BETANCUR PÉREZ, pretende cada uno de ellos como valor de perjuicios morales, la suma de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$24.843.480), valores determinados en salarios mínimos mensuales vigentes, que se habrán de liquidar al momento del pago.

Con este valor de pretensión la parte demandante olvida, igual que su apoderado, que “la acción indemnizatoria debe llevar a que la víctima, víctimas o afectados reales, recuperen los bienes que hayan perdido o que se les haya disminuido con un hecho criminoso o proveniente de otros factores, pero siempre en acogimiento a circunstancias ceñidas a la verdad, respecto del derecho ajeno y no pretendiendo un aumento del patrimonio, ni buscando un enriquecimiento”, cómo ahora, lo está haciendo la parte demandante, acudiendo a una acción judicial con marcado interés económico y mas aun cuando la conducta de la accionante es la determinante de sus lesiones.

Frente a este tema de la indemnización, vale la pena anotar lo expuesto por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín en reciente sentencia, cuando expuso:

“Indemnizar en términos generales es compensar, pagar el daño ocasionado con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial, roto por el hecho que lo causó. La indemnización tiende a restablecer el equilibrio patrimonial, económico, emocional y fisiológico que causó el daño; esto implica que al momento de indemnizar al afectado, se debe hacer en forma integral teniendo en cuenta todos los niveles de la persona que se vieron afectados por el hecho dañoso. En Colombia, el artículo 16 de la ley 446 de 1998, en relación a la valoración de los daños establece: “dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, los valores de daños irrogados a personas y a las cosas, atenderá a los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

4. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO.-

El JURAMENTO ESTIMATORIO que exige la norma tiene que tener un razonamiento cierto, concreto y exacto, no es simplemente informar el valor pretendido, sino indicar y sustentar la motivación y los elementos sobre los que se fundamenta, fundamentos que deben ser razonables frente a cada uno de los perjuicios que se pretenden, y para el caso concreto la parte demandante no expone en ese juramento, claramente cuáles son esos componentes patrimoniales que suman el valor que se ha dado al JURAMENTO ESTIMATORIO. Estimación razonada, no es proceder a la suma de perjuicios pretendidos, es indicar en qué y cómo se acreditan los mismos, y en el caso presente, los accionantes se ha limitado simplemente a determinar ese juramento estimatorio cómo una cifra numérica, económica. No es por demás tener presente y de acuerdo a la oposición que se planteara sobre los fundamentos a la pérdida de capacidad laboral, que los elementos, tanto probatorios como conceptuales, del dictamen presentado, con el que se pretende probar dicha pérdida de capacidad como ya lo indiqué, está fundamentado en lesiones y consecuencias diferentes a las planteadas y debidamente reconocidas en los Dictámenes de Medicina Legal, de una parte, y lo consignado en la historia clínica de la lesionada, ambas pruebas las pretende hacer valer la parte accionante.

Considera este apoderado, que la valoración determinada en el JURAMENTO ESTIMATORIO también es contraria a la prueba presentada por la accionante SARA ISABEL BETANCUR MUÑOZ, cuando para acreditar sus ingresos o salario, adjunta contrato de trabajo que como ya se dijo, se firmó posterior al accidente que diera origen a esta demanda.

Frente a este tema el Instituto Colombiano de Derecho Procesal ha dicho: “El Código General del Proceso, tiene como objetivo: la formulación de pretensiones justas y economizar la actividad probatoria, desarrollándola no como medio de prueba, sino también como requisito de la demanda...”.

“Puede concluirse que el juramento estimatorio es una medida que permite cumplir con una finalidad procesal legítima como es desestimular pretensiones sobreestimadas o temerarias y el incumplimiento de esta finalidad será sancionable, si la conducta de la parte es ajena al principio de buena fe procesal, como cuando se falta a la diligencia en su labor probatoria”.

Al referirse el mismo Instituto Colombiano de Derecho Procesal “**al juramento estimatorio** como medio de prueba de la cuantía reclamada”, indicó:

“El juramento estimatorio es una prueba arraigada en nuestro sistema procesal desde el Código Judicial (CJ), y aunque originalmente lo era restrictivo, a partir del 2010 su cobertura se dimensiona a toda reclamación por concepto de perjuicios, mejoras, compensaciones y frutos, lo cual es predicable para procesos de naturaleza civil, contractual o extracontractual, e incluso para procesos en otras jurisdicciones”.

“Se erige esta prueba para contrarrestar pedimentos que desbordan los montos cuantificados, pues en innumerables casos el accionante reclama condenas en cuantías

15

CARLOS LAVERDE GALLEGO

ABOGADO U.P.B.

273

Medellín, Cra. 65 8B-91, Of. 362, 2º P., Terminal del Sur, Telefax 354 65 72, E-mail: carlosalaverde@gmail.com

exageradas a las que en realidad tenía derecho, sin que se aplicaran consecuencias por dicha conducta”.

“Su razón de ser es la transparencia y lealtad en el reclamo que, en su beneficio, hace la parte interesa por los conceptos señalados, al fijar el monto solicitado en una suma concreta que estima con juramento y que está dispuesta a probar si hay lugar a ello, pues de comprobarse que la cuantía estimada resulta desproporcionada por exceder el porcentaje indicado en la norma, el peticionario no actuó conforme a principios de lealtad y buena fe en su reclamo, conducta que se reflejará en una multa a favor de la contraparte”.

Y trae como conclusión: “El juramento estimatorio que se utiliza para peticiones justas, y por lo mismo de manera ponderada, economiza actividad probatoria con respecto a la acreditación de los montos reclamados, pues es prueba de carácter provisional que se torna en definitiva si la cuantía no es objetada, pero en caso de así serlo, cederá a otros medios probatorios que hará valer la parte que estimó. En todo caso, si el juez considera que la estimación ingresa al terreno de la injusticia, cumpliendo su deber de dirección procesal, se manifestará decretando pruebas de oficio, a fin de que se compruebe lo pretendido”.

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES.-

Demandados, Sabaneta, carrera 43-A N° 63 Sur 25.

Apoderado: Medellín, carrera 65 N° 8B-91, oficina 362, o en la secretaría de su Despacho.

Accionantes: Las expuestas por ellos al demandar.

INFORME.-

En escrito separado se presenta DEMANDA DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

Atentamente,

CARLOS LAVERDE GALLEGO
T.P. 12.545 del C. S. de la Judicatura

13 SEP'19 9:31AM

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADOS DE ENVIGADO
Presentado Personalmente por:
Carlos Laverde Gallego
13 SET. 2019
Causa: T-P Nro: 12.545
Folios: 41 Firma: *[Firma]*